

8/76

Missing Argentina

NO DATE

CUØØ1A

P6

Señor

Profesor Helene Claudio Fragozo, Jun 21.11

BRASIL

Distinguido colega:

I. A principios de 1975 tuve ocasión de formular ante la Comisión Internacional de Juristas una denuncia referida a la situación de los abogados en la República Argentina. Como consecuencia de esa denuncia, el señor Secretario General de la Comisión, Neal McDermont, tuvo a bien encomendarme una investigación en mi país. Fue así como tuvo usted ocasión de verificar "in situ" la seriedad de la denuncia, produciendo un informe que posteriormente la Comisión circuló entre sus miembros y organismos gubernamentales y no-gubernamentales ligados a los problemas de los derechos humanos.

II. Recuerdo que en su informe, muy preciso y objetivo por cierto, enunciaba usted una larga lista de abogados amenazados de muerte por la supuestamente no-gubernamental "Alianza Anticomunista Argentina". En la misma nómina se contaban los doctores Mario A. Hernández, Roberto C. Sinigaglia, Eduardo Sanjurjo, Felipe Rodríguez Araya, entre muchos otros.

My nombre también constaba en la nómina, pero re-ferida a quienes habían abandonado el país. Razones que sería largo y ocioso relatar decidieron mi regreso a la Argentina a fines del año pasado.

III. Y bien: con posterioridad a su documentado informe, la situación de los derechos humanos en la Argentina se ha agudizado en sentido altamente negativo. Y el "crescendo" de ataque a esos derechos ha sido estruendoso a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, bien que se advierte con bastante facilidad que se trata simplemente de una etapa más aguda que continúa la política de exterminio iniciada durante el gobierno peronista, y la cual usted tan bien retratará en el recordado informe.

No quiero caer en adjetivaciones ni transmitirle el sentimiento de horror esencial que embarga al pueblo argentino en este momento, porque pienso que su sensibilidad le permitirá compartirlo a poco que compruebe a qué extremos se ha llegado aquí. Por eso no le referiré los múltiples casos de secuestros y asesinatos de parecida factura de los que usted describía en su informe (recuerdo los casos del doctor Ortega Peña, del doctor Silvio Frondizi, del ex-Vicgobernador de Córdoba Atilio López, entre otros) que han ocurrido desde el 24 de marzo; ni el número escalofriante de desaparecidos; ni las violaciones, mutilaciones, vejaciones y apremios a que son sometidos por la inteligencia militar y policial los detenidos o secuestrados; ni la angustia de miles de familias que no saben siquiera dónde están sus allegados presos y si viven o han muerto. Quizá sea para usted un indicio de la gravedad de la situación la Carta Pastoral de la Comisión Episcopal Argentina del 15 de mayo último, donde se señalan como pecado estas conductas aunque se justifique la generalización de la represión militar y policial; el carácter del documento y la fuente de la que emana dan una pauta de la gravedad, insisto, de los desbordamientos represivos de las fuerzas armadas. Yo le diría que en Argentina se han acumulado las desgraciadas experiencias de Chile, Uruguay y de su propia patria.

Todas estas horribles violaciones de la Declaración Universal serían menester relatarlas en un "dossier" que me atrevo a decir incluiría varios volúmenes; y me estoy refiriendo a lo ocurrido del 24 de marzo a la fecha, solamente. Ni el espacio me lo permite, ni creo que esta carta tuviera la más remota posibilidad de traspasar la frontera y llegar a sus manos, si me aplicara a denunciar las violaciones múltiples de los derechos humanos, tanto en el campo de la seguridad personal, el trato a los detenidos, las garantías procesales, los derechos obreros, la libertad de prensa y expresión, etc.

IV. Es por ello que reduciré mis comentarios a lo ocurrido con varios de los abogados que usted mencionaba en su informe, algunos de los cuales incluso tuvieron ocasión de entrevistarlo en Buenos Aires cuando usted estuvo por acá para preparar su informe.-

Ya antes del 24 de marzo, el doctor Felipe Rodríguez Araya fue secuestrado en su domicilio de la ciudad de Rosario y acribillado a balazos su cadáver apareció en la autopista que une esa importante ciudad con Santa Fe. El procedimiento era el mismo que usted describió en su informe. Rodríguez Araya tenía militancia política en un partido que se ha caracterizado siempre por su oposición a todo modo de violencia, especialmente la de signo popular, era afiliado y dirigente de la Unión Cívica Radical y los antecedentes que seguramente tuvieron en cuenta sus asesinos consistían en haber actuado profesionalmente antes del 25 de mayo de 1973 como defensor de presos políticos, tarea en la cual hubo de denunciar con particular energía las torturas aplicadas a sus defendidos por las autoridades militares y policiales de Rosario (dicho sea de paso, quien fuera antes de 1973 Jefe de Policía de Rosario y se caracterizó por su sadismo, un Comandante Mayor de Gendarmería de apellido Peced, ha sido nuevamente nombrado en el mismo cargo por el gobierno militar).-

Después del 24 de marzo, el 11 de abril para ser más preciso, fue secuestrado y asesinado el doctor Rene Bodó, miembro del Partido Intransigente (de oposición legal y crítico de la guerrilla). Antecedente de su asesinato había sido defensor de presos políticos en su provincia, San Luis.-

Y sólo en Buenos Aires, han sido secuestrados y no se conoce su actual destino, por lo menos, los siguientes abogados: Natalio Sobel, A. Fernández Blanco, Rodolfo Paludi, Horacio Ramiro Vivas, Mario A. Hernández y Roberto Sinigaglia.-

Ilustrativos son los casos de Hernández, Sinigaglia y Vivas.-

El 11 de mayo, a la 1 y 10 horas, Hernández se aproximaba a su domicilio en la localidad de Béccar, partido de San Isidro, en el noroeste de Buenos Aires. Allí lo aguardaban varios automotores sin chapas de identificación y una camioneta, ocupados por alrededor de 20 hombres que vestían ropas de combate del Ejército Argentino. Cuando Hernández llegó a la esquina y se encontró con los emboscados, fue ametrallado, reducido e introducido por la fuerza en uno de los vehículos, mientras el jefe del grupo ordenaba despojarlo de sus papeles y de las llaves de la casa. Acto seguido, el grupo se introdujo en la casa de familia de Hernández, y procedió a su total saqueo, transportando por dos horas a los vehículos cuanto objeto de arte, mueble transportable y valioso, vajilla, ropa, alfombras y libros y papeles halló. La particularidad es que la biblioteca de literatura política, económica, social y jurídica no fue sino destrozada o desparramada por el suelo; los incursos se alzaron con los libros y enciclopedias que eran de más fácil venta. Faltaron también todos los documentos personales de Hernández, su esposa y sus hijos, los títulos de propiedad de su casa, el automóvil de su propiedad; todos los artefactos del hogar de valor; discos;... en fin, un saqueo en regla y selectivo. Mientras se producía este saqueo, algunos vecinos se alarmaron y llamaron a un auto de patrulla de la Policía; el auto llegó y su jefe encargado habló con el jefe de los incursos, quien se dio a conocer como el Mayor del Ejército, luego de lo cual la policía se retiró. Mientras tanto, algunos de los incursos penetraron en unas casas vecinas y se identificaron como integrantes del Ejército Argentino.-

A favor de Hernández se interpuso un recurso de "habeas corpus" el 14 de mayo. En ese procedimiento, tanto el Ministerio del Interior, cuanto la Policía Federal, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aé-

rea informaron que Hernández no estaba detenido. De nuestra parte, hemos recibido informaciones de que fue atendido en un hospital militar por sus heridas, y luego fue entregado al Servicio de Informaciones de Ejército. Pero, en rigor, nada sabemos de su suerte.-

Conectado con lo ocurrido a Hernández está el caso de Roberto C. Sinigaglia. El mismo día 11 de mayo, a las 4 horas, el estudio de Sinigaglia en la calle Viamonte 1355 (a menos de ciento cincuenta metros del Palacio de Justicia) fue allanado por elementos que se dieron a conocer como pertenecientes a la Policía Federal, los que sustrajeron un televisor, dos radios, dinero que existía en la oficina, expedientes, papeles y obras de arte, para lo cual destrozaron la puerta aún contando con el ofrecimiento de la llave por el encargado del edificio. Ignorante de todo esto, Sinigaglia se aproximó a su oficina cerca de las 10 horas, ya que necesitaba completar unos papeles para luego abandonarla ante el temor fundado de que las amenazas contra su vida se materializaran. Y bien: fue interceptado por los policías, que lo golpearon ferozmente con las culatas de sus pistolas en la cabeza, lo que le produjo heridas de las que manaba abundante sangre. Desde entonces sólo hemos podido saber que Sinigaglia "pasó" por la Superintendencia de Seguridad Federal -donde no se lo registró oficialmente como detenido- y luego fue entregado al Servicio de Informaciones Navales. El recurso de "habeas corpus" interpuesto a su favor, tuvo el mismo resultado que el deducido a favor de Hernández.-

En el caso de H. Gracio Ramiro Vivas (recordará usted que en su informe hace referencia a que en la amenaza escrita que recibió se había cometido el mismo "error" que campeaba en un certificado que lo acreditaba como defensor de un preso político), varios individuos que se hicieron reconocer como integrantes del Ejército irrumpieron violentamente en su domicilio, donde estaba comiendo con sus tres pequeños hijos. El departamento fue saqueado y Vivas fue llevado, sin que se tengan tampoco noticias de su paradero.-

V. Hay otros casos, que sería cargoso referir. Por ejemplo, entre los amenazados mencionados en su informe que ahora han sido secuestrados y cuya suerte se ignora, está el doctor Eduardo Sanjurjo. En una palabra: la situación que usted describía en su informe se ha agravado, y la política actual es continuación endurecida de la descrita en su presentación ante la Comisión Internacional de Juristas, quizá la mejor prueba de ello consista en señalar que justamente quienes habían sido amenazados en 1974-1975 ahora han sido secuestrados y se ignora su suerte. Suerte que, por lo demás, aparece como razonablemente horrible a poco que se advierte que diariamente aparecen cadáveres no identificables en las aguas del Río de la Plata, en lugares apartados o dentro de automóviles; si se toma en consideración que personajes de la política latinoamericana (como los ex-parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Hugo Gutiérrez Ruiz, o el ex-Presidente de la República de Bolivia, General Juan José Torres) han sido también violentamente secuestrados y asesinados impunemente, en operaciones que no habrían podido realizarse sino con el consentimiento del gobierno militar.-

Pienso, estimado Profesor, en consecuencia que una vez más deben movilizarse los esfuerzos internacionales para frenar esta terrible ola de violaciones múltiples a los derechos humanos. Y si me he permitido escribirle a usted es porque tengo la esperanza de que esta carta llegue a sus manos, lo que seguramente no ocurriría si pretendiera dirigirme directamente a la Comisión. Concretando: me permito solicitarle transmita estas impresiones al señor Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas, con la sugerencia de que se intente realizar una encuesta en territorio argentino para verificar los atentados a que he hecho referencia, para ulteriormente difundir las conclusiones y tomar todas las otras medidas que se juzguen conducentes a paliar esta tremenda situación.

VI. Lamentando no poder suministrarle una dirección a la cual contestarme -he tenido que abandonar mi estudio y mi domicilio, incendiado el primero como consta en su informe, allanado el segundo con el habitual saqueo-, le saluda muy cordialmente y le pido sea mi autorizado vocero

Carlos A. González Gartland
rt